

México responde a la DEA, la CNTE vuelve a las calles y el empleo del IMSS pierde fuerza detrás de las cifras

La agenda nacional entró en una nueva fase de presión. El Gobierno federal rechazó las acusaciones de la DEA sobre una supuesta conexión entre autoridades mexicanas y los cárteles; Morena cerró filas mientras prepara sus filtros rumbo a 2027; la CNTE anunció una nueva movilización por acuerdos incumplidos; y los datos del IMSS revelan que el crecimiento del empleo formal depende en buena medida de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales. La tensión no está concentrada en un solo frente: avanza simultáneamente en la política, las relaciones laborales y la seguridad social.

La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse después de que Terrance Cole, director de la DEA, afirmara que existe una “conexión mortal” entre las redes criminales y el Gobierno mexicano. El funcionario sostuvo que ambas estructuras son inseparables y que constituyen la principal prioridad de la agencia antidrogas, pero no presentó nombres, investigaciones concretas ni expedientes judiciales que permitieran verificar una acusación de semejante alcance. El Gabinete de Seguridad respondió que el señalamiento carece de sustento y contradice los resultados públicos de la estrategia federal, entre ellos la detención de casi 60 mil personas, el aseguramiento de más de 31 mil armas, el decomiso de 498 toneladas de drogas y la inhabilitación de más de 2 mil 600 laboratorios clandestinos.

El intercambio no quedó en el terreno diplomático. Morena convirtió el episodio en una defensa política de la soberanía nacional y recordó los antecedentes de corrupción y colaboración criminal registrados durante gobiernos anteriores, mientras el PRI y el PAN presentaron las palabras de la DEA como evidencia de una crisis de credibilidad internacional. El problema es que ambas narrativas avanzan más rápido que los hechos: Estados Unidos formuló una acusación grave sin exhibir pruebas y la oposición la dio prácticamente por acreditada; el Gobierno respondió con cifras generales, aunque esas cifras tampoco sustituyen una aclaración puntual sobre los casos que pudieran estar bajo investigación.

Esta confrontación puede convertirse en uno de los ejes rumbo a las elecciones de 2027. Morena buscará presentarse como el partido que defiende la soberanía frente a presiones extranjeras, mientras sus adversarios intentarán vincular cualquier

investigación estadounidense contra gobernadores o funcionarios con una responsabilidad sistémica del oficialismo. El margen de error será reducido. Una defensa automática de todos los perfiles puede resultar costosa si posteriormente aparecen evidencias; una acusación general contra todo el Gobierno mexicano, sin expedientes, también debilita la cooperación bilateral y alimenta una disputa basada más en propaganda que en justicia.

Dentro de Morena, la dirigencia intenta mantener el control de la sucesión territorial. Citlalli Hernández aclaró que el registro de aspirantes a las coordinaciones estatales no significa aceptación ni candidatura, pues todavía deberá revisarse la documentación antes de definir quiénes podrán participar en las encuestas. La precisión busca contener expectativas y dejar abierta la posibilidad de excluir perfiles con problemas legales, administrativos o reputacionales. El partido tiene ventaja electoral en distintos estados, pero también una abundancia de aspirantes que puede convertirse en conflicto si las reglas no se aplican con transparencia.

El nuevo partido PAZ también empieza a revelar su posición dentro del sistema. Su dirigente, Hugo Eric Flores, se presentó como representante de la organización ante el INE mientras aún ocupaba una diputación federal por Morena. Después de las críticas, se comprometió a pedir licencia. La salida reduce la contradicción formal, pero no elimina la lectura política: PAZ mantiene coincidencias con Morena y podría convertirse en un aliado del bloque gobernante, más que en una fuerza verdaderamente independiente.

Mientras los partidos acomodan sus piezas, la presión sindical vuelve a crecer. La Sección 9 de la CNTE convocó a una movilización en la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de acuerdos alcanzados con las autoridades educativas federales y capitalinas. La protesta puede parecer limitada por su alcance local, pero contiene una señal relevante: la Coordinadora podría sustituir los grandes plantones nacionales por una secuencia de movilizaciones seccionales, organizadas alrededor de compromisos específicos incumplidos. Esa estrategia sería menos espectacular, pero más difícil de contener, porque trasladaría el conflicto a distintas entidades y dependencias.

La CNTE no parte de cero. Continúan pendientes las demandas sobre pensiones, la Ley del ISSSTE de 2007, la sustitución de la Usicamm y los acuerdos alcanzados durante las mesas de negociación. El Gobierno logró reducir temporalmente la

intensidad de las protestas, pero no cerró el expediente. Sin mecanismos públicos de seguimiento, cada compromiso puede convertirse en un nuevo punto de movilización. La transparencia en el cumplimiento ya no es un asunto administrativo; es una herramienta de gobernabilidad.

Otro conflicto laboral se desarrolla en Aeroméxico. La mayoría de los sobrecargos rechazó el proyecto de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo para el periodo 2026-2028 y el sindicato mantiene abierta la posibilidad de un emplazamiento a huelga. La dirigencia ha pedido a sus integrantes mantenerse informados exclusivamente mediante canales oficiales y ha subrayado que cualquier paro debe cumplir los requisitos de la Ley Federal del Trabajo y contar con respaldo colectivo.

El rechazo obliga a la empresa a presentar una propuesta más competitiva en salarios y condiciones laborales. Una huelga tendría efectos inmediatos sobre pasajeros, rutas, turismo y actividad económica, especialmente después del Mundial. Sin embargo, también sería un error reducir el asunto a la afectación operativa: el fondo es una negociación contractual donde los trabajadores consideran insuficiente la oferta empresarial. La salida sostenible requiere una nueva propuesta y no solamente presión para que el sindicato modere sus demandas.

En el IMSS, las cifras laborales ofrecen una fotografía menos sólida de lo que sugieren los titulares. El Instituto cerró junio con 22 millones 779 mil 704 trabajadores afiliados y un crecimiento anual de 2%. A primera vista, el resultado parece confirmar una recuperación firme del empleo; sin embargo, una parte considerable provino de la incorporación de conductores y repartidores de plataformas digitales. Al descontarlos, el crecimiento anual se reduce aproximadamente a 1%, mientras el avance mensual baja de 0.34% a 0.15%.

La formalización de estos trabajadores sigue siendo una buena noticia. Por primera vez, miles de personas pueden acceder a servicios médicos, incapacidades, cobertura por riesgos de trabajo y ahorro para el retiro. El punto es distinto: registrar relaciones laborales que ya existían no equivale a crear nuevos empleos. Confundir ambos fenómenos puede llevar a una lectura exageradamente optimista del mercado laboral.

El Mundial tampoco produjo el impulso esperado. Aunque hubo contrataciones temporales en transporte, turismo, servicios y comercio, la creación acumulada de empleo durante el primer semestre quedó más de 36% por debajo del promedio histórico y la diferencia aumenta si se excluyen los registros de plataformas. Los analistas advierten que parte de las plazas creadas podría desaparecer en los próximos meses, una vez concluido el torneo y normalizada la actividad económica.

La verdadera evaluación del IMSS no deberá concentrarse únicamente en junio. Será necesario observar cuántos trabajadores permanecen afiliados durante el segundo semestre, cuántos alcanzan ingresos suficientes para acceder plenamente a los seguros y qué proporción de los empleos temporales se convierte en permanente. Un alta de pocas semanas mejora la estadística; una relación laboral estable fortalece realmente la seguridad social.

La jornada deja una conclusión incómoda: las instituciones enfrentan problemas que no pueden resolverse con una sola narrativa. La acusación de la DEA exige pruebas, no consignas; los procesos internos de Morena requieren filtros verificables, no únicamente llamados a la unidad; la CNTE y los sobrecargos de Aeroméxico necesitan acuerdos cumplibles, no mesas interminables; y el IMSS debe medir la calidad y permanencia del empleo, no sólo el número de registros.

México no atraviesa una crisis única, sino varias tensiones que avanzan al mismo tiempo. La diferencia entre contenerlas o permitir que escalen dependerá de algo menos espectacular que un discurso, pero mucho más importante: evidencia, negociación y resultados.